

Por todas estas consideraciones y de acuerdo con lo prevenido en el artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: primero, que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Querétaro que amparó al quejoso. Segundo: la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Ramon Feliú como representante del Sr. su padre D. Hermenegildo, contra la órden de embargo expedida por el recaudador de rentas del Estado de Querétaro, para el cobro del primer tercio de contribuciones del corriente año.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pebro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 9 de 1873. — *Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por los CC. Clemente Camacho, Manuel Carbajal y otros, contra los decretos de contribuciones de ese Estado de 24 de Febrero y 22 de Mayo de 1872.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el presente recurso de amparo se ha introducido por los CC. Clemente Camacho, Manuel Carbajal, Mateo y Abundio Ramirez, Demetrio Aguilar, José de Jesus Monzalve, José Dolores Rodriguez, Leandro Beltran y Lic. José M. Burgos, contra los decretos de 24 de Febrero y 22 de Mayo de 1872, que establecen varias contribuciones, y han sido expedidos por D. Julio M. Cervantes. Reputan los quejosos violada la garantía que otorga el artículo 16 del Código fundamental, para no ser molestados sino por mandamiento de autoridad competente. Y como falta en el caso la autoridad, es nula la competencia. Esta falta de autoridad la apoyan, primero: en que la legislatura se instaló con siete miembros, que formaron aparente y no realmente *quorum*, por no ser diputados los CC. Córdova y Quesada electos por el Distrito de Amealco; segundo: en que habiendo figurado en el anterior Congreso, como diputados del mismo Distrito, los CC. Juan N. Rubio y Eleuterio Frias y Soto; no se pudo repetir la eleccion en el bienio actual en favor de los predichos Córdova y Quesada; que por lo mismo, y como se ha dicho, no son diputados conforme á los artículos 35 y 36 de la Carta local.

En cuanto á D. Julio M. Cervantes, le obstan de lleno los artículos 77 y 80 de la Constitución del Estado, para ser gobernador constitucional de Querétaro.

Hay aquí por lo visto dos cuestiones: primera, la de la legalidad de la elección de dos miembros de la legislatura; segunda: de la personalidad del Ejecutivo del Estado.

La primera está resuelta ya por la misma legislatura, única autoridad competente en el caso; pues como ordena el artículo 40 de la Constitución del Estado: "El Congreso es el único que puede calificar las elecciones de sus miembros y resolver las dudas que ocurran sobre ellas." Esta atribución es constitucional, si se compara con el Código general de la República. El artículo 117 dice á este respecto: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución á los funcionarios federales, se entienden reservadas á los Estados." Leyéndose íntegra, no se encontrará en ella facultad alguna concedida á los funcionarios federales para calificar la elección de diputados de una legislatura. Por el contrario, se hallará un artículo análogo en el 60, cuyo tenor es: "El Congreso califica las elecciones de sus miembros y resuelve las dudas que ocurran sobre ellas." El artículo 50 dice: "El Supremo Poder de la federación se divide para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial. Nunca podrán unirse dos ó mas de estos Poderes en una persona ó corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo." De aquí es que si el juzgado calificara la legalidad de la elección de un diputado al Congreso de la Unión, se arrogaría una facultad especial del Legislativo, y derogando el orden de las jurisdicciones, violaría abiertamente la Constitución. Calificando la elección de un diputado al Congreso de un Estado, además de esa misma violación, cometería la de los artículos 40 y 41 del pacto federal, no respetando la libertad y soberanía de ese propio Estado en un punto exclusivo tocante á su régimen interior.

En cuanto á la segunda cuestión, es por ahora inútil tratarla, supuesto que está al frente del Poder ejecutivo el C. Ignacio Castro, vice-gobernador electo popularmen-

te, y sin el anatema constitucional que pesa sobre D. Julio Cervantes (artículo 77 y 80 de la Constitución de Querétaro).

"Es obligación de todo mexicano contribuir para los gastos públicos así de la Federación como del Estado y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." De este deber impuesto por el artículo 31 de la Constitución federal, tratan de eximirse los quejosos, como si fuese una garantía violada. Y es de advertir, que se relaciona con el orden público el pago de las contribuciones, sin las que no puede aquel mantenerse; como nos lo enseña un historiador romano: "*Nam neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis, habere queunt*" (Fac. hist. IV. cap. 74).

Es grave error confundir en una misma denominación las facultades del hombre que puede poner en ejercicio individualmente y para su provecho particular, como son las que conocemos con el nombre de derechos individuales, con las obligaciones que le impone la sociedad, para proporcionar á esta los medios de emplear el poder para arreglar y administrar sus intereses colectivos de la manera mas conveniente. Si llamamos derechos á las primeras, es impropio dar á las segundas la misma denominación, y considerarlas como garantías individuales, reclamables por la vía de amparo. Por lo que el Promotor fiscal pide se deniegue el solicitado.

Querétaro, 15 de Marzo de 1873.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Abril 3 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por los CC. Clemente Camacho, Manuel Carbajal, Demetrio Aguilar, Mateo Ramírez, Abundio Ramírez, José Dolores Rodríguez, Leandro Beltran, Jesus Monsalve y José M^a Bur-

gos, contra los decretos de contribuciones de éste Estado de 24 de Febrero de 1872, y 29 de Mayo del mismo año; el escrito de queja que obra á fojas 11 de este expediente con los documentos con que fué acompañado y se ven desde la 1ª á la 10ª; el informe rendido por la autoridad ejecutora y el traslado que evacuó el Promotor fiscal á fin de decidir el punto sobre suspension; el auto en que esta ordenó; el segundo informe con justificación de la misma autoridad ejecutora, y lo expuesto por el Fiscal en vista de ese documento; las pruebas rendidas y alegatos consiguientes; la citación para sentencia, y todo lo demás que ver convino.

Considerando: que los actores en su escrito en que promueven el amparo, hacen deducir la incompetencia de la Legislatura para dictar leyes, en la ilegalidad con que se instaló, aplicando esa incompetencia á la garantía que contiene el artículo 16 de la Constitución general de la República, señalándolo como violado en sus personas y bienes con los expresados decretos de 24 de Febrero y 29 de Mayo de 1872, que establecieron varias contribuciones que se les exigen por autoridades incompetentes.

Considerando: que no es posible decidir esta controversia, sin investigar si existe ó no la ilegalidad objetada de donde emana la incompetencia, cuya investigación aunque recaiga sobre autoridades de un Estado, no puede estimarse como ataque á su soberanía; porque sin esa investigación no sería posible decidir la cuestión, cuando el fin de ese artículo 16 y del 101 de la Constitución citada, es proteger al individuo débil de las agresiones del fuerte que en cualquiera manera ejerza autoridad; y ese fin en vigor de justicia no puede quedar ilusorio y burlada la garantía, por que se trate de ver si en la autoridad de un Estado existe ó no la ilegalidad que la reduzca á incompetente.

Considerando: que la competencia de toda autoridad, no procede del hecho solo y

puro de que alguno ó algunos se constituyan en tal autoridad, sino de la ley que trasmite esa competencia á quien ella eleva al rango de autoridad y nunca al que la usurpa, y esto es lo que se debe examinar.

Considerando: que los CC. que impetraron el amparo se fundan en el principio que se acaba de asentar, puesto que la incompetencia que alegan no es la de traslimitación de la competencia que dá la ley á toda autoridad legítima, sino la que resulta de no haberse transferido ninguna competencia á la Legislatura y Ejecutivo del Estado, porque solo de hecho ejercen autoridad; de donde se sigue, que absolutamente serán incompetentes para todo, una vez que se pruebe su ilegalidad.

Considerando: que esto último aparece plenamente probado en este juicio con el testimonio de seis testigos que afirman que la Legislatura se instaló con menos de la mitad del número de diputados de que se compone; siendo así que el artículo 101 de la Constitución particular de este Estado, dice: "el Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo, sin la concurrencia de mas de la mitad de sus miembros," mientras que ni la autoridad ejecutora al informar remitió dato en contrario, y mientras que la Legislatura se negó á remitir los que se le pidieron, por cuya razón nada destruye la prueba de los actores.

Considerando: que lo expuesto por el C. Promotor en su alegato de fojas 47 no destruye lo probado por los quejosos, porque no se trata de calificar las elecciones de diputados de Amcalco, ni de resolver si por alguna cosa peculiar de la elección era dudosa, que es á lo que se refiere el artículo 40 de la Constitución del Estado, citado por dicho Promotor, sino á poner en claro si ese Distrito debió elegir un solo diputado conforme á su población, y si al elegir dos se infringió el artículo 36 de esa misma Constitución que manda que los Distritos alternen en el derecho de elegir un diputado mas de los que les correspondan; y si ha-

biendo electo Amealco en el anterior periodo esos dos diputados en uso de tal derecho, pudo nombrar en el actual tambien dos, barrenando y evidentemente conculcando el repetido artículo 26, que es cuestion muy diversa de la de calificar elecciones.

Considerando por último: que de no tomarse en cuenta todas las anteriores razones, quedaría sin objeto el artículo 1º de la repetida Constitución general, y destruido en su base el objeto de las instituciones, que como ese mismo artículo declara, no es otro que el de asegurar los derechos del hombre.

Por tales fundamentos, y por los que ministran el expresado artículo 1º que se acabó de citar, el 16 y 101 de la propia Constitución de la República, y en uso de las facultades del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo, que se debe declarar y se declara: que la Justicia federal ampara y protege á los CC. Clemente Camacho y demás que al principio se nombran, contra los decretos de 24 de Febrero y 29 de Mayo del año de 1872, expedidos por la Legislatura de este Estado, estableciendo varias contribuciones. Notifíquese á las partes; prevénase á los actores repongan con el papel del sello 3º con el del común de que se usó por no detener la secuela del juicio; sáquense copias de esta sentencia para el Semanario Judicial y Diario del Gobierno de la República, y hecho, elévese este expediente á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos consiguientes.—Así definitivamente juzgando, lo pronunció, mandó y firmó el C. Juez de Distrito primer suplente, Lic. Mariano Pimentel.—Doy fé.—*Mariano Pimentel.* *Francisco Ruiz*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 26 de 1872. Visto este juicio de amparo promovido por los CC. Clemente Camacho, Manuel Carbajal, De-
TOMO IV. — PARTE II.

metrio Aguilar, Mateo Ramirez, Abundio Ramirez, José Dolores Rodriguez, Leandro Beltran, Jesus Monsalvo y José Mº Burgos, contra los decretos de contribuciones del Estado de Querétaro de 24 de Febrero y 29 de Mayo de 1872, por ser violadas con ellos la garantía á que se refiere el art. 16 de la Constitución federal, en virtud de haber sido expedidos por el Gobernador y la Legislatura de dicho Estado que no ejercen autoridad legítima, y considerando: que los quejosos alegan como causas de ilegitimidad respecto de la legislatura, que se instaló sin que hubiera el número de diputados necesario para formar *quorum*; y respecto del Gobernador, que el C. Julio Mº Cervantes fué declarado Gobernador contra lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución del Estado, que prohíbe la reelección; y que á este punto debe limitarse la resolución del amparo solicitado: que la legislatura se instaló con siete diputados número que forma el *quorum* de ella: que si en las elecciones de los diputados por el Distrito de Amealco hubovicios, constando que realmente fueron electos por tal Distrito, solo á la Legislatura del Estado toca, como cuerpo electoral, calificar y apreciar estos vicios: que si al hacerse la declaración de Gobernador la Legislatura infringió el artículo 77 de la constitucion del Estado, ésta infracción por sí sola no puede ser objeto de amparo de garantías, sino de apreciación de la misma Legislatura como cuerpo electoral. Por todas estas consideraciones y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara, primero: que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Querétaro que amparó á los CC. Clemente Camacho y demás que al principio se nombran, contra los decretos de 24 de Febrero y 29 de Mayo de 1872, expedidos por la Legislatura del Estado, estableciendo varias contribuciones, y en consecuencia, la Justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos contra los efectos de las leyes ci-
58

tadas. Devuélvansolas actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca. Asi por mayoría de votos lo decretaron los CC Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. *José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lozano.—José M. Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 20 de 1873 *Lic. Enrique Landa* oficial mayor

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos, por D. Manuel del Sel, contra el Administrador de Rentas del Distrito de Cuernavaca, por violacion de las garantías que otorgan los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que en 20 de Marzo último, la Administracion de Rentas de este Distrito, cuotizó al súbdito español Don Manuel del Sel en la cantidad de 270 pesos, que debía pagar desde esa fecha hasta el fin del año, por contribucion sobre su venta de mulas, cuya realizacion en todo el año se calculó en 6750 pesos. En la boleta que con tal motivo libró la Administracion al Sr. del Sel, y que obra á fojas 1 de estos autos, le advirtió que si no estaba conforme con la cuotizacion hecha por el Administrador, podía reclamar ante la autoridad

política del Distrito dentro del término de cuatro dias contados desde aquella fecha; y el dia 22 presentó aquel Sr. un ocurso en papel simple á la Jefatura política, diciendo, que no era exacto que tuviese jiro alguno de venta de mulas y ni aun había pensado vender ó comprar una esclta, por lo que pedía se le retirase la boleta y no se le volviera á molestar con ese motivo, pues la cuotizacion era nula por no existir la base en que debiera apoyarse. La Jefatura acordó se devolviese el ocurso al interesado por no estar en las facultades de aquella oficina resolver en ningun sentido la reclamacion, y segun el oficio de fojas 2, se devolvió el ocurso al Sr. del Sel el dia 24. Con fecha 25, la Administracion libró el mandamiento que obra á fojas 4, previniéndole, que si en el término de tres dias, no enteraba la cantidad de \$85.55 que adeudaba por contribuciones sobre su realizacion de mulas, se procedería al embargo, exigiéndose ademas, los recargos que determina la ley.

Segun la liquidacion que obra en ese mismo documento, le suma expresada se forma de las cantidades siguientes: \$12.50 por derecho de patente; \$37.50 por recargo de tres tantos, conforme al artículo 16 de la ley de 26 de Octubre de 1872; \$11.28 contribucion de 4 por ciento correspondiente á los dias del 20 al 31 del actual; \$16.45 por contribucion federal; y \$2.82 recargo del 6½ por ciento de cobranza. Al dia siguiente, presentó el Sr. Sel un nuevo ocurso á la Administracion, pidiendo se mandase suspender el embargo y se le eximiese del pago de la contribucion, por no existir el jiro sobre que se impuso. La Administracion dejó sin proveer este ocurso; y el 28 trabó ejecucion en \$17.33 que se encontraron en los cajones de la tienda del Sr. del Sel, producto de sus ventas, y en treinta piezas de mantas de la fábrica "La Fama", notificándole al dia siguiente, que el primero de Abril se procedería al remate de las mantas embargadas. En 29 del mismo Marzo, presentó escrito el Sr. del Sel á este Juzgado quejándose